



**Rama Judicial del Poder Publico**  
**Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Atlántico**  
**JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**

Barranquilla D.E.I.P., trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Radicado	08-001-3333-006- <b>2019-00149</b> -00
Medio de control	Reparación Directa
Demandante	Rubén Darío Domínguez Gómez
Demandado	Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial
Jueza	Lilia Yaneth Álvarez Quiroz

**I.- PRONUNCIAMIENTO.**

Procede el despacho a dictar sentencia dentro la demanda de acción de reparación directa interpuesta por el señor Rubén Darío Domínguez Gómez contra la Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial, de conformidad con los artículos 181 y 187 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos:

**II.- ANTECEDENTES.**

**2.1 Pretensiones:**

- Declarar que la Nación- Rama Judicial son administrativa y patrimonialmente responsables por el daño antijurídico causado al señor Rubén Darío Domínguez Gómez por error judicial.
- Condenar al pago por concepto de perjuicios materiales consistente en el lucro cesante consolidado a favor del señor Rubén Darío Domínguez Gómez la suma de \$135.469.610.00
- Condenar a la Nación- Rama Judicial, debe pagar, por concepto de perjuicios materiales de lucro cesante futuro a favor del señor Rubén Darío Domínguez Gómez los intereses corrientes a la máxima tasa legal que se ocasionaren sobre la suma de \$135.469.610.00 desde el 26 de abril de 2017 hasta la fecha en que se dicte sentencia. El valor estimado de esta pretensión a la fecha de la presente solicitud es de \$56.404.879.00
- Que se disponga el pago de los intereses de mora a la máxima tasa legal vigente sobre todos los valores adeudados a mi poderdante, y la condena en costas incluyendo agencias en derecho.

**2. 2. Hechos.**

El despacho se permite sintetizarlos así

1.- El día 2 de agosto de 2007 el señor Rubén Darío Domínguez Gómez por intermedio de apoderado judicial radicó demanda ejecutiva singular en contra de las señoras María Ligia Usma Flórez y María Brígida Gómez Usma, con el fin de obtener el pago de la letra de cambio No. 001 por valor de \$ 75.000.000.00, correspondiéndole por reparto al Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla y radicado 08001310301020070020100.

2-. El 10 de agosto de 2007 se libró por parte del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla orden de pago por vía ejecutiva a su favor por la suma pretendida.

3-. El 11 de agosto de 2008 se ordenó por parte del Juzgado Décimo Civil del circuito de Barranquilla seguir adelante con la ejecución.

4-. El 25 de noviembre se aprobó la liquidación del crédito por valor de \$135.469.610.oo.

5-. El 14 de noviembre de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla avocó conocimiento del proceso ejecutivo.

6-. El 16 de diciembre de 2015 del Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo No. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 ordenó la remisión y nuevo reparto de los expedientes habido en los Juzgados de ejecución civil. Orden que se materializó mediante oficio No. PSAATL0E-002131 del 16 de diciembre de 2015. En cumplimiento de lo anterior, el proceso con radicado 08001310301020070020100 que se encontraba en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, pasó al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla.

7.- El 26 de abril de 2017 el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito con radicado 08001310301020070020100.

8.- El 21 de julio de 2017 la apoderada del señor Rubén Domínguez presentó ante ese juzgado solicitud de ilegalidad del auto del 26 de abril de 2017, la cual fue rechazada el 14 de agosto de 2017.

9.- El 24 de agosto de 2017 se interpuso acción de tutela contra el referido Juzgado correspondiéndole el radicado No.08001-22-13-000-2017-00361-0. La cual fue negada en ambas instancias y con salvamento de voto por el magistrado Ariel Salazar Ramírez de la corte suprema de Justicia.

## **2.3 Contestación**

### **2.3.1 Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial**

El apoderado de la parte demandada se opuso a todas las declaraciones y condenas que sean contrarias a la Entidad que representa, toda vez que, no existe razón de hecho o derecho sobre la cual el Estado deba resarcir daño alguno a terceros porque carece de fundamentos jurídicos.

Adujo que, el error judicial se materializa en una providencia proferida por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, para cuya configuración requiere de dos presupuestos:

- Que el afectado haya interpuesto los recursos previstos en el ordenamiento, pues, de lo contrario, en los términos del artículo 70 de la Ley 270 de 1996 se estaría frente a un caso de culpa exclusiva de la víctima.

-. La firmeza de la providencia contentiva del supuesto error.

En ese orden, no se puede predicar daño alguno al haberse supuestamente librado un mandamiento de pago injustificadamente, y posteriormente, según alega, una terminación anormal del proceso, el cual como lo anotó no fue objetado dentro del término legal, razón por la cual quedó en firme.

En ese contexto, concluye que, las providencias proferidas dentro de dicho proceso ejecutivo, se surtieron y sustentaron en normas sustanciales y procesales aplicables a la materia. Por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.

Propone como excepción la de caducidad de la acción, y culpa exclusiva de la víctima.

## **2.4 Actuación Procesal.**

La demanda fue presentada el 20 de junio de 2019 ante la Oficina de Servicios de los Juzgados Administrativos de esta ciudad, siendo asignada por reparto a este estrado judicial. Por auto de fecha 15 de julio de 2019 fue admitida, ordenando las notificaciones y traslados. Notificada en debida forma, la parte demandada presentó en tiempo contestación con la proposición de excepciones de fondo, a las cuales se les dio traslado mediante fijación en lista el 2 de octubre de 2020.

Surtido el traslado de las excepciones propuestas, mediante proveído fechado 12 de noviembre de 2020 se fijó como fecha para la celebración de la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el 2 de diciembre de 2020, en la cual se consideró innecesaria la audiencia de pruebas, disponiéndose que una vez de allegaran las pruebas documentales se les daría traslado y se decidiría por auto lo concerniente a la audiencia de alegaciones y juzgamiento. Una vez recibida la prueba se dio traslado por secretaría el 17 de noviembre de 2021, por lo que con auto calendado 25 de noviembre del presente año se ordenó la presentación de alegatos de conclusión.

## **2.5 Alegaciones.**

### **2.5.1 Parte Demandante.**

En sus alegatos, el apoderado de la parte demandante, señaló que, en el presente caso se determina la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial por error judicial al expedirse por el Juzgado Segundo de Ejecución Del Circuito de Barranquilla la providencia del 26 de abril de 2017 que decretó el desistimiento tácito sobre un proceso ejecutivo que ocasionó la pérdida patrimonial de su apadrinado, providencia contraria a derecho y configurativa de una vía de hecho por defecto sustantivo en razón a que el fallador desconoció por completo la actuación interna procesal de la Rama Judicial (Acuerdo No.PSAATLOF-002131 del 16 de diciembre de 2015) mediante la cual se trasladó el expediente del Juzgado Primero de Ejecución de Circuito de Barranquilla.

Adicionalmente, el recaudo probatorio determina con claridad que la actuación de traslado no cumplió con los requisitos de publicidad en que deben estar soportadas las actuaciones procesales de la Rama Judicial, lo anterior en razón a que el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla no publicó los procesos que fueron debidamente trasladados a otro despacho en cumplimiento del Acuerdo No. PSAATLOF-002131, y por el contrario como se evidencia en el mismo expediente no existe auto que demuestre la publicidad del mismo. Adicionado a lo anterior la defectuosa administración de los expedientes y mala suministración de información conllevó a mi apadrinado y apoderado de la fecha a que se desconociera por completo que el expediente se encontraba en el

Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, sumado a que en el sistema de información judicial siempre plasmaba que el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla tenía su cargo dicho proceso, por lo consiguiente fue imposible ejercer su derecho de debida vigilancia procesal sobre lo actuado; lo que conllevó a que quedara en firme el auto del 26 de abril de 2017 emitido por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito de Barranquilla, ya que por la falta de conocimiento que en ese despacho estaba a su cargo el proceso ejecutivo donde fungía como demandante el actor no se pudieron presentar los recursos debidos que conllevarían a revocar dicha providencia.

Invoca con fundamento sentencia del Consejo de Estado que señala: *“lo que ocurre en el caso, porque si bien el actor no interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, contra el auto del 26 de abril de 2017, ello no era un motivo suficiente ni absoluto para negar la protección invocada, pues el juzgador incurrió en una protuberante vía de hecho por defecto sustantivo, que afecta a los derechos fundamentales del tutelante y hacía viable la concesión del amparo, porque no existió ninguna razón jurídicamente válida para que el juzgador acusado decretara la terminación del proceso por desistimiento tácito”*. Concluyendo que si bien no agotó los recursos procedentes contra la providencia acusada de error judicial, cuando el error es protuberante debe tutelarse el derecho invocado.

#### **2.5.2. Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Barranquilla – Rama Judicial.**

El apoderado de la entidad demandada, por su parte, manifestó que, el error jurisdiccional como escenario de responsabilidad está previsto en la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, que en el artículo 65 establece que quien haya sido víctima de error de esa naturaleza podrá demandar al Estado la reparación de perjuicios.

El artículo 66 de esa norma definió el error jurisdiccional como aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, que se materializa a través de una providencia contraria a la ley. La Corte Constitucional condicionó su constitucionalidad a que dicho error se materialice en una providencia judicial ya que encuadra dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia ha definido como una *“vía de hecho”*.

De acuerdo con dicha disposición, tal como quedó después de su condicionamiento de constitucionalidad, el estudio de responsabilidad debe realizarse desde una perspectiva funcional, que reconoce la autonomía del juez. Por ello, el error jurisdiccional no corresponde a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica, sino que debe enmarcarse en *“una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso”*.

Sostiene que, la parte demandante afirma que los falladores naturales le perjudicaron al no poder recuperar las cantidades de dinero que pretendía al interior del plurimencionado proceso ejecutivo, el mismo que por el paso del tiempo terminó en desistimiento tácito, pero esto no indica que los agentes de la Rama Judicial hubiesen actuado contrario a derecho. Los procesos ejecutivos poseen sus etapas, prescripciones, caducidades y demás acciones perentorias como lo es el desistimiento tácito, por lo cual los jueces deben actuar conforme a derecho. El actor afirma que la decisión tomada por los jueces ordinarios es errada y apartada del derecho, pero no expone las razones fácticas o jurídicas por las cuales arribó a esa conclusión.

También pretende que se realice una nueva valoración de las pruebas recaudadas y practicadas dentro del curso de ese proceso, sin ser escuchadas ni valoradas las pruebas que aportó el otro extremo la Litis que conformó el proceso civil. Posición que viola los principios de la valoración racional de la prueba conforme a la sana crítica. Concluyendo que la parte demandante no logró demostrar si los falladores de primera y segunda instancia de la jurisdicción civil incurrieron en un error judicial el cual trajo como consecuencia la terminación del proceso de manera desfavorable a sus intereses. La regla general enseña que, quien realiza una afirmación, tiene la carga de la prueba, es decir, le corresponde demostrar y comprobar la veracidad de su afirmación, así lo ha plasmado el Código General del Proceso en su artículo 167, cuando sostiene: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho...”

Con las pruebas, no se logró comprobar que existió error judicial por parte de los falladores, solo se comprobó la existencia de un proceso que finalizó con sentencia de segunda instancia. Es por ello que solicita no se acceda a las pretensiones de la demanda y en su lugar se exonere de cualquier responsabilidad a la entidad.

## **2.6 Concepto del Ministerio Público**

No rindió concepto

## **III.- CONTROL DE LEGALIDAD**

No advirtiéndose ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a dictar la sentencia correspondiente.

## **IV.- CONSIDERACIONES**

### **4.1 Problema Jurídico.**

El problema jurídico en el presente asunto se centra en establecer; si la Nación - Rama Judicial, es administrativamente responsable por el daño antijurídico y perjuicios materiales en calidad de lucro cesante consolidado y lucro cesante futuro más intereses moratorios causados al demandante, por el presunto error judicial dentro del proceso ejecutivo 080013103010-2007-00201-00 que se adelantó ante el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla al ser decretada la terminación del proceso por desistimiento tácito mediante auto de fecha 26 de abril de 2017.

### **4.3 Tesis**

Se sostendrá que, el daño antijurídico alegado por el demandante no se encontró acreditado, pues no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predicen de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que el auto analizado fuera contrario a derecho, deviniendo el daño alegado en antijurídico, lo que fuerza denegar las pretensiones de la demanda.

#### **4.3.- Marco Normativo y Jurisprudencial**

##### **4.3.1. Clausula General de la Responsabilidad Extracontractual del Estado**

La Responsabilidad Patrimonial del Estado se encuentra prevista en el artículo 90 de la Constitución Política, cuyo tenor reza:

*“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.*

De conformidad con el precepto constitucional transcrito tenemos que, siempre que se infiera un daño antijurídico imputable por acción u omisión de las autoridades públicas, el Estado deberá responder patrimonialmente, pues la persona afectada tiene la posibilidad que sean reparados los perjuicios padecidos y que no tenía la obligación soportar, a través de la acción de reparación directa contemplada en el artículo 140 del Código Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En ese sentido, el Estado es patrimonialmente responsable cuando el daño antijurídico reclamado le sea imputado por la acción u omisión de sus agentes, sobre este particular el Consejo de Estado ha sostenido:

*“A partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”<sup>1</sup>. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”*

*Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”<sup>2</sup>. En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.*

*En lo relativo a la imputación, se entiende que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”<sup>3</sup>; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”<sup>4</sup>.*

*Al respecto, en recientes pronunciamientos, esta Sección ha reiterado que:*

*“la imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano*

<sup>1</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de agosto de 2007; Exp. 15932

<sup>2</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de agosto de 2008; Rad. 17042

<sup>3</sup> Ibídem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

<sup>4</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; Exp. 7622

*material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”<sup>5</sup> (subrayado fuera de texto).*

En ese sentido, los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración, en la cual debe acreditarse la relación entre la conducta y el daño y la razón por la cual las consecuencias de esa afectación deben ser asumidas por el Estado (...). En lo tocante a la imputación, corresponde determinar si el daño puede ser imputado a las entidades demandadas o una de ellas, o si por el contrario, es atribuible al hecho exclusivo de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.

#### **4.3.2 Responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional**

El consejo de Estado respecto al error jurisdiccional ha señalado<sup>6</sup>:

*Como punto de partida para decidir el recurso que se encuentra a consideración de la Sala, se precisa que el error jurisdiccional como título jurídico de imputación de responsabilidad del Estado, regulado en la Ley 270 de 1996<sup>7</sup>, plantea un vínculo inescindible con el derecho de acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva, en tanto su configuración implica la vulneración o lesión de dichos derechos<sup>8</sup> a través del ejercicio abiertamente irregular, arbitrario o erróneo de la actividad jurisdiccional; de ahí que el juicio de responsabilidad realizado bajo este título de atribución, requiere verificar si la acción u*

<sup>5</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 9 de junio de 2010; Rad. 1998-0569

<sup>6</sup> **CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A, Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ**, Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintiuno (2021),

<sup>7</sup> Publicada en el Diario Oficial 42.745 de 15 de marzo de 1.996.

<sup>8</sup> Conviene precisar que el acceso a la administración de justicia implica el ejercicio del derecho de acción, es decir, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Y el ejercicio del derecho de contradicción, pues el individuo debe contar con el acceso a la jurisdicción cuando se ha formulado una pretensión en su contra [Rojas Gómez, Miguel Enrique. *Lecciones de derecho procesal, Tomo I, Teoría del proceso. Tercera edición, Bogotá D.C, enero de 2013*].

De esta forma, el derecho de acceso a la administración de justicia es un presupuesto indispensable para la materialización de los demás derechos fundamentales pues no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso. Por consiguiente, se erige como uno de los pilares que sostiene el modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, toda vez que abre las puertas para que los individuos ventilen sus controversias ante las autoridades judiciales y de esta forma se protejan y hagan efectivos sus derechos. [Consejo de Estado. *Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 28 de mayo de 2012, Rad. 2011-01174, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren*]

Por su parte, si bien el derecho a la tutela judicial efectiva no se encuentra codificado en el derecho positivo colombiano, a diferencia de lo que ocurre en el ordenamiento alemán, italiano y español; lo cierto es que ha sido reconocido jurisprudencialmente, a partir de la influencia de las normas convencionales – artículo 25 de la *Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos* - como un derecho fundamental que comprende el derecho de acceso a la administración de justicia, algunas garantías propias del debido proceso y la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a sea real y efectivo. Luego, este derecho involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión *pro actione*.

Para la doctrina colombiana, este derecho dispone la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad y sin obstáculos o barreras desproporcionadas, a un juez o tribunal independiente e imparcial, frente al cual se pueda ejercer plena defensa de los derechos o intereses propios con el fin de obtener, dentro de un plazo razonable, la debida protección del Estado. Catalogándolo como un derecho de naturaleza prestacional, pues exige ciertas obligaciones del aparato estatal con miras a su realización. En este sentido, será el legislador quien defina los cauces que permitirán su ejercicio.[ Araujo, R (2011). Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Propuesta para fortalecer la justicia administrativa. Visión de derecho comparado, Estud. Socio-Juríd vol.13 no.1 Bogotá Jan./June 2011]

*omisión de la autoridad investida de tal facultad menoscabó el ejercicio de los mencionados derechos.*

*En concordancia con lo establecido por el legislador en el artículo 66 de la Ley 270 de 1996, el error jurisdiccional, como fuente de responsabilidad estatal, a la luz del cardinal enunciado contenido en el artículo 90 de la Constitución Política, es aquél cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, que en su carácter de tal y en el curso de un proceso, profiere una providencia contraria a la ley, esto último, “bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de esta (error de derecho)”<sup>9</sup>.*

*Bajo tales premisas, la jurisprudencia ha sido enfática en considerar que el error de hecho o de derecho debe incidir en la decisión jurisdiccional en firme, para que se configure una lesión de los derechos ya comentados, que la víctima no tenga el deber de soportar; lesión que, en todo caso, debe ser personal y cierta<sup>10</sup>.*

*Lo anterior, implica, además, que la tarea del juez de la responsabilidad, no deba traducirse en la reproducción de la labor del juez de instancia, pues su labor debe limitarse a la verificación de la existencia de los yerros que se endilgan a la luz de la motivación jurídica y probatoria del fallo que cuestiona, so pena de transgredir el principio de la cosa juzgada<sup>11</sup>.*

*Además de lo anterior, debe indicarse que el régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error jurisdiccional es de carácter subjetivo, lo cual, impone a la parte demandante demostrar el yerro; y, con este, acreditar el daño y su imputación al Estado, ante lo cual la parte demandada, para eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional o la presencia de una causa extraña que rompa la imputación del daño que se le pretende atestar.*

En este orden de ideas, la demostración de la existencia de un error judicial, se supedita, entre otros, al cumplimiento de las siguientes exigencias específicas: i) el agotamiento de los medios procesales de revisión y corrección judicial de las determinaciones que se adopte al interior del proceso; ii) la firmeza de la providencia contentiva del error, de manera que no pueda revertirse por las vías judiciales ordinarias; y, iii) la manifestación del yerro, su naturaleza y la afectación que causa, sin que sea necesario invocarlo directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretarlo de una valoración integral de la demanda, siempre y cuando aparezca explicado de manera clara, precisa y esté debidamente argumentado<sup>12</sup>.

#### **4.4 Caso Concreto**

##### **4.4.1.- Hechos Probados**

1-. En el juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla se surtió el proceso ejecutivo seguido por el demandante Rubén Darío Domínguez Gómez contra la señora María Ligia Usma Flórez y María Brígida Gómez Usma, con radicado 08001310301020070020100<sup>13</sup>.

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de agosto de 2008, exp. 16594, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido, sentencia de 12 de octubre de 2017, exp. 35337, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

<sup>10</sup> “c) El error jurisdiccional debe producir un daño personal y cierto que tenga la naturaleza de antijurídico, esto es, que el titular no tenga la obligación jurídica de soportar. Con ello, entonces, se excluyen las decisiones que se mueven en la esfera de lo cuestionable o las sentencias que contienen interpretaciones válidas de los hechos o derechos. || d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución-auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo de 2011, exp. 22.322.

<sup>11</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.576. C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

<sup>12</sup> Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser “claros, ciertos, específicos y suficientes”, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una “acción constitucional”. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: anuel José Cepeda Espinosa.

<sup>13</sup> Acta individual de reparto de 2 de agosto de 2007 página 9 archivo Anexo Expediente judicial.



2-. En el proceso<sup>14</sup> se surtieron las siguientes etapas:

-. El 2 de agosto de 2007 el señor Rubén Darío Domínguez Gómez presentó demanda ejecutiva, por conducto de apoderado, contra la señora María Ligia Usma Flórez y María Brígida Gómez Usma, pretendiendo el pago de la obligación contenida en la letra de cambio por la suma de \$75.000.000.00, más los intereses de mora. Se aportó como título ejecutivo Letra de cambio de agosto de 4 de 2005 por valor de \$75.000.000.00 suscrita por las demandadas. Así como el folio de matrícula de inmueble 017-0027203, sobre el cual se solicitó la medida cautelar de embargo.

-. El 10 de agosto 2007 se libró mandamiento de pago por la suma de \$75.000.000.00 más los intereses y se decretó medida cautelar, solicitando a la parte actora prestar caución, mediante auto de esa data<sup>15</sup>.

-. Con memorial el 25 de agosto de 2007 se aportó póliza de la caución.<sup>16</sup> La cual es aceptada con auto de 23 de agosto de 2007<sup>17</sup>.

-. Con oficio 07-309 la Registradora de Instrumentos Públicos de la Ceja –Antioquia comunicó al juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla el embargo del inmueble 017-0027203.<sup>18</sup>

-. Con auto de 21 de septiembre de 2007 se procedió a comisionar al Juzgado Civil Municipal de la Ceja- Antioquia, en turno, para llevar a cabo la diligencia de secuestro del bien inmueble

-. El 23 de octubre de 2007 se solicitó la citación para notificación de las demandadas, con el pago de los aranceles<sup>19</sup>. Documento que fue retirado el 25 de octubre de 2007<sup>20</sup>.

-.El 23 de noviembre de 2007 se solicitó la notificación por aviso, teniendo en cuenta que la citación para la notificación personal no había sido devuelta.<sup>21</sup>

-. El 6 de agosto de 2008 se aporta la constancia de notificación por aviso de 4 de junio de 2008 y se solicita dictar sentencia<sup>22</sup>.

-. Con auto calendado 11 de agosto de 2008 se resolvió seguir adelante con la ejecución a favor del señor Rubén Domínguez, tal como lo ordenó el mandamiento de pago de fecha 10 de agosto de 2007. Decretando la venta en pública subasta del inmueble embargado y secuestrado, previo avalúo<sup>23</sup>.

-. Con auto adiado 12 de noviembre de 2008 realizó la liquidación del crédito por la suma de \$135.469.610.00. Corriéndose traslado por el término de 3 días<sup>24</sup>.

---

<sup>14</sup> Copias auténticas del expediente con radicado 0800-0310-2017-00201-00

<sup>15</sup> Auto que libra mandamiento de pago y decreta embargo, página 10 y 60 del cuaderno de medidas

<sup>16</sup> Memorial y anexo 2 folios. Páginas 61 y 62 del cuaderno de medidas.

<sup>17</sup> Auto de 1 folio. Página 63 del cuaderno de medidas

<sup>18</sup> Oficio contenido en 1 folio. Página 64

<sup>19</sup> Memorial contenido en la página 11.

<sup>20</sup> Formato de citación con firma de recibido de 25 de octubre de 2007, página 14 a 16

<sup>21</sup> Memorial página 16

<sup>22</sup> Memorial página 25

<sup>23</sup> Auto contenido en 3 folios. Páginas de 30 a 32

<sup>24</sup> Autos contenidos en 2 y 1 folios. Página 33 a 35

- Con auto fechado 25 de noviembre de 2008 se aprobó la liquidación del crédito practicada por el Despacho<sup>25</sup>.
- En proveído de 14 de agosto de 2009 se fijaron agencias en derecho para un total de \$8.128.176.60<sup>26</sup>. Aprobado con auto de 25 de agosto de 2009.
- Con auto de 18 de marzo de 2011 se admitió a la abogada María Victoria Cohen como apoderada sustituta del demandante<sup>27</sup>.
- Con auto de 13 de julio de 2011 se resolvió solicitud de junio 22 de 2011 en la cual se solicitó un nuevo despacho comisorio en el cual se libró nuevamente dirigido al Juez civil municipal de la Ceja – Antioquia<sup>28</sup>.
- Con auto 2 de agosto de 2012 el Juzgado Promiscuo Municipal de la Ceja Antioquia ordenó la devolución del Despacho Comisorio, toda vez que el inmueble está ubicado en el Municipio de El Retiro – Antioquia<sup>29</sup>. Con auto de 22 de agosto de 2012 el Juzgado Décimo Civil del Circuito se agregó el expediente el Despacho Comisorio No. 44 de 28 de julio de 2011<sup>30</sup>.
- El 9 de abril de 2013 la parte ejecutante presentó solicitud de corrección de dicho Despacho Comisorio<sup>31</sup>. El cual fue expedido el 19 de abril de esa anualidad.
- Con decisión de 14 de noviembre de 2013 el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla avocó conocimiento del proceso 2007-00201 proveniente del Juzgado Décimo Civil de circuito de Barranquilla, conforme a lo dispuesto por el acuerdo PSAA13-9984<sup>32</sup>.
- El juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla con proveído de 3 de octubre de 2014 se agregó Despacho Comisorio de 19 de abril de 2013<sup>33</sup>, en el cual el comisionado Jugado Municipal del Retiro- Antioquia indicó que el secuestro del bien inmueble no se pudo realizar por falta de identificación de linderos, por lo que manifestó que de volverse a comisionar se le otorgara facultad de subcomisionar a fin de poder establecer los linderos del inmueble<sup>34</sup>.
- Con proveído de 26 de abril de 2017 el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla decretó la terminación del proceso por desistimiento tácito, conforme al numeral 2 literal B artículo 317 del CGP. Ordenando el decreto de las medidas cautelares<sup>35</sup>.
- Con memorial de 21 de julio de 2017 la apoderada de la parte demandante solicitó la ilegalidad de la decisión<sup>36</sup>.

---

<sup>25</sup> Auto contenido en un folio. Página 36.

<sup>26</sup> Auto contenido en folios. Página 37-38

<sup>27</sup> Auto contenido en 1 folio. Página 41

<sup>28</sup> Auto contenido en 1 folio. Página 82, 83

<sup>29</sup> Auto contenido en 1 folio página 94

<sup>30</sup> Auto contenido en 1 folio página 1

<sup>31</sup> Memorial presentado 9 de abril de 2013 contenido en 1 folio página 2

<sup>32</sup> Auto contenido en 1 folio. Página 42

<sup>33</sup> Auto contenido en 1 folio página 55

<sup>34</sup> Acta de diligencia de secuestro del Juzgado promiscuo municipal el Retiro – Antioquia del despacho comisorio No. 17 del juzgado 10 civil del circuito de Barranquilla, realizada el 12 de agosto de 2014. Contenido en 2 folios página 51 y 53.

<sup>35</sup> Auto contenido en 1 folio. Página 44

<sup>36</sup> Memorial contenido en 5 folios. Páginas 46-50

- El Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, con proveído de 14 de agosto de 2017 negó la solicitud<sup>37</sup>.

3-. Inconforme con la decisión la abogada del demandante presentó tutela contra la decisión alegando violación al debido proceso comoquiera que, según lo narrado, a ésta no se le notificó o comunicó el envío del mencionado expediente a un juzgado de ejecución, luego de su creación por lo que el seguimiento lo siguió realizando en el juzgado de origen. El Tribunal del Distrito Judicial- Sala Civil - Familia que conoció de la demanda de tutela negó el derecho aduciendo que de las pruebas allegadas se pudo establecer que, no hubo la violación a los derechos invocados y era improcedente por el principio de subsidiariedad<sup>38</sup>. Sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia – Sala Civil, con salvamiento de voto.

#### **4.4.2 Elementos de la Responsabilidad Extracontractual del Estado**

- **Hecho dañoso:**

De la narrativa de la demanda se puede inferir que el demandante hace consistir como hecho dañoso, la expedición de la providencia del 26 de abril de 2017, proferida por el Juzgado Segundo de Ejecución del Circuito de Barranquilla que decretó el desistimiento tácito del proceso ejecutivo que ocasiono la pérdida patrimonial del demandante, la cual se encuentra en firme. Providencia contraria a derecho y configurativa de una vía de hecho por defecto sustantivo en razón a que el fallador desconoció por completo la actuación interna procesal de la Rama judicial (Acuerdo No. PSAATLOF-002131 del 16 de diciembre de 2015) mediante la cual se trasladó el expediente del Juzgado Primero de Ejecución del Circuito de Barranquilla, lo que conllevó que no se pudiera recurrir contra la decisión, pues se desconocía dicho traslado.

- **Daño antijurídico:**

El daño antijurídico, entendido como la lesión a un derecho, bien jurídico o interés legítimo que la demandante no está en el deber jurídico de soportar. La parte actora lo hace consistir en los perjuicios sufridos, como consecuencia de la pérdida patrimonial debido a la terminación del proceso ejecutivo en el que pretendía el pago de la suma de \$75.000.000.00, por concepto de capital más los intereses moratorios.

- **De la imputabilidad del daño a la entidad demandada:**

De la imputación, se entiende que se trata de la “*atribución de la respectiva lesión*”<sup>39</sup>; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (*imputatio iure o subjetiva*) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”<sup>40</sup>.

<sup>37</sup> Auto contenido en 1 folios esta incompleto.

<sup>38</sup> Providencia de la Corte suprema de justicia- Sala de Casación Civil, página 61 a 84

<sup>39</sup> Ibidem, Sentencia 15932 del 30 de agosto de 2007.

<sup>40</sup> Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia de julio 12 de 1993; Exp.7622; C.P. Carlos Betancur Jaramillo;

De tal manera, a continuación, se analizará armónica y coherentemente el material probatorio obrante en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del C.G.P., el cual estipula que: *“Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El Juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”*.

#### **4.4.3.- Análisis Crítico De Las Pruebas Frente Al Marco Jurídico**

La parte demandante en sus pretensiones solicita que se declare administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla – Rama Judicial, por el daño antijurídico sufrido, con ocasión al presunto error jurisdiccional, por la decisión de terminación, por desistimiento tácito, del proceso ejecutivo surtido en el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Barranquilla, enviado en primer lugar al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla y posteriormente al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, el cual decretó la mencionada terminación, sin tener en cuenta que el último traslado no fue notificado o comunicada la parte demandante.

Por otro lado, la parte demandada manifiesta que, no hay daño, pues no se logró comprobar que, existió error judicial por parte de los falladores, ya que, solo se comprobó la existencia de un proceso que finalizó con sentencia de segunda instancia. Siendo que la parte demandante no cumplió con la carga probatoria y argumentativa para el título de imputación invocado.

Conforme a lo aducido en el marco normativo y jurisprudencial del presente proveído, se tiene que, en aquellos asuntos en que se pretenda la declaratoria de responsabilidad del Estado por daños sufridos, deben ser antijurídicos, es decir que el demandante no debe estar en la obligación de soportarlas, y que éstos sean imputables a los demandados. Por lo tanto, para que la entidad demandada resulte responsable por falla del servicio, le corresponde a la parte actora probar la concurrencia de un daño antijurídico y de la imputabilidad a la entidad estatal.

La reparación directa por error judicial impone la carga a la parte demandante de exponer de manera clara, precisa y debidamente argumentada la disconformidad de la providencia contentiva del yerro con el marco normativo que regula el tema de la decisión, incluida la valoración probatoria que corresponda realizar, sin que con aquello llegue a ser necesario que el yerro sea invocado directamente, sino que el juez de instancia pueda interpretar, a partir de una valoración integral de la demanda, si la providencia atacada es contraria a la Ley y por tanto, lesiona los derechos de acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva del interesado<sup>41</sup>.

Así las cosas, la carga de suficiencia de la parte actora se despliega frente a los dos supuestos de configuración de la responsabilidad por error judicial, estos son, el error de derecho y el de hecho, de ahí que, *v.gr.* cuando se trate del primero se deberá establecer, por lo menos, un señalamiento de las normas que se considera transgredidas y una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas; y, por su parte, en el error

---

<sup>41</sup> Para la Corte Constitucional, en sede de acción de constitucionalidad, los yerros constitucionales deben acreditar ser *“claros, ciertos, específicos y suficientes”*, lo cual resulta más riguroso que en sede de reparación directa, a pesar de ser una *“acción constitucional”*. Corte Constitucional, sentencia C-1052 de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

de hecho deberá entenderse cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro en la actividad probatoria y por qué con ello se transgredió la ley.

Descendiendo al caso concreto, el Despacho encuentra plenamente acreditado la existencia de un proceso jurídico ejecutivo seguido por el señor Rubén Domínguez, con radicado No. 08001-31-03-010-2017-00201-00 el cual se dio por terminado por el desistimiento tácito de que trata el artículo 317 del CGP, con proveído de fecha 26 de abril de 2017 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla. Lo que ocasionó un daño en el patrimonio del actor.

El auto cuestionado que decretó la terminación del proceso, tuvo su fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo, considerando que los supuestos indicados en dicha norma se encontraban cumplidos. Auto apelable, de conformidad con lo establecido en el Código General del Proceso.

El numeral 2° y los literales b y c del artículo 317 del CGP dispone:

*2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas "o perjuicios" a cargo de las partes.*  
*(...)*

*El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:*

*b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;*

*c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;*

Se puede establecer entonces, del expediente del proceso ejecutivo allegado como prueba que, la última actuación dentro del proceso ejecutivo con radicado 2007-00201, es la decisión del Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla calendada 3 de octubre de 2014, por medio del cual se agregó Despacho Comisorio de 19 de abril de 2013<sup>42</sup>, en el cual el comisionado Juzgado Municipal de el Retiro- Antioquia indicó que el secuestro del bien inmueble no se pudo realizar por falta de identificación de linderos, por lo que solicitó que de volverse a comisionar se le otorgara facultad de subcomisionar a fin de poder establecer los linderos del inmueble. Disponiendo así mismo ponerlo en conocimiento de la parte demandante.

Es menester señalar que el mencionado juzgado había avocado conocimiento, con auto del 14 de noviembre de 2013, en virtud del Acuerdo PSAA13-9984 del 5 de septiembre de 2013.

Quiere decir lo anterior que, desde el auto de 3 de octubre de 2014, dictado por el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, el proceso 2007-00201 no tuvo más actuación a petición de parte o de oficio. Siendo procedente la terminación del proceso por desistimiento tácito una vez se vencieron los dos (2) años, que serían contados posterior a la ejecutoria del auto (8 de octubre de 2014), esto es el 8 de octubre de 2016; y la terminación fue decretada el 26 de abril de 2017.

---

<sup>42</sup> Auto contenido en 1 folio página 55

Ahora bien, lo que cuestiona el actor es que, dentro del término antes indicado el proceso ejecutivo con radicado 2007-00201, fue traslado del Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla al Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, sin que dicha actuación fuera puesta conocimiento del ejecutante, lo que impidió que pudiera hacerle seguimiento al proceso en dicho juzgado y poder así recurrir la decisión, no cumpliendo con el principio de publicidad que deben tener las actuaciones internas de la Rama Judicial.

Frente al anterior argumento consideramos que, en cumplimiento del deber de seguimiento, desde desde el 3 de octubre de 2014 al 26 de abril de 2017, el actor tuvo más de dos (2) años para indagar por el estado y ubicación del proceso, tanto en el Juzgado Décimo Civil de Circuito de Barranquilla como en el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla y el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, y en consecuencia informarse del traslado efectuado por dichos juzgados, pues se observa en el expediente del proceso civil que, las solicitudes, poderes o memoriales obrantes, por parte del ejecutante se allegaron cuando el expediente aún se encontraba en el Juzgado Décimo Civil de Circuito de Barranquilla, lo que permite inferir que el actor no indagaba por el expediente desde antes de su traslado al Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, pues si fuera el caso habría de enterarse que el mismo había sido remitido, en virtud del cumplimiento de un acto administrativo de carácter general, que de conformidad con lo establecido en el trámite de tutela propiciado por éste, según la providencia de la Corte Suprema de Justicia<sup>43</sup>, se pudo establecer que dicho acto fue publicado en el Juzgado Décimo Civil de Circuito de Barranquilla, para conocimiento de los abogados.

De las solicitudes realizadas por la parte ejecutante, en el mencionado proceso, se tiene que, la última fue la solicitud de corrección del despacho comisorio el 9 de abril de 2013, realizada ante el Juzgado Décimo Civil de Circuito de Barranquilla, el cual se puede inferir que fue enviado a la Jurisdicción de el Retiro – Antioquía, toda vez que fue devuelto al Juzgado de origen e incorporado por el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, mediante auto fechado 3 de octubre de esa anualidad.

Ahora bien, revisado el sistema informático de consulta dispuesto por la Rama Judicial para constatar lo establecido en el trámite de tutela, se observa que el 24 de octubre de 2013 se le dio salida al proceso, para su remisión al juez de ejecución<sup>44</sup>. Lo que permite evidenciar que el Juzgado de origen, esto es el Décimo Civil de Circuito de Barranquilla, si dio a conocer la remisión, a través de los canales oficiales de la Rama Judicial cumpliendo con el principio de publicidad, como puede evidenciarse en la siguiente imagen extraída de la página web de la Rama judicial.

---

<sup>43</sup> Expediente allegado como prueba solicitada por la parte ejecutante.

<sup>44</sup> <https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=z3EFCcZS%2fzKklj7uUvz1FDOhCE%3d>

**Radicación: 08001333300620190014900**  
**Demandantes: Rubén Darío Gómez Domínguez.**  
**Demandados: Nación – Nación- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de**  
**Barranquilla – Rama Judicial**  
**Medio de Control: Reparación Directa.**

cesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=z3EFCcZS%2fzzKklj7uUvz1FDOhCE%3d

Datos del Proceso				
Información de Radicación del Proceso				
Despacho			Ponente	
701 Ejecución Circuito - Civil			JUZGADO PRIMERO CIVIL DE EJECUCION DEL CIRCUITO	
Clasificación del Proceso				
Tipo	Clase	Recurso	Ubicación del Expediente	
De Ejecución	Ejecutivo Singular	Sin Tipo de Recurso	Secretaria	
Sujetos Procesales				
Demandante(s)		Demandado(s)		
- RUBENDARIO DOMINGUEZ GOMEZ		- MARIA LIGIA USMA FLOREZ - MARIA BRIGIDA GOMEZ USMA		
Contenido de Radicación				
Contenido				

Actuaciones del Proceso					
Fecha de Actuación	Actuación	Anotación	Fecha Inicia Término	Fecha Finaliza Término	Fecha de Registro
24 Oct 2013	SALIDA DEL PROCESO	EL PROCESO FUE REMITIDO AL JUEZ DE EJECUCIÓN CONSTA DE DOS CUADERNOS, Y TIENE 45 Y 55 FOLIOS ÚTILES. ESTE PROCESO TIENE SENTENCIA. -			24 Oct 2013
19 Apr 2013	CONSTANCIA SECRETARIAL	ASIGNADO A MORA PARA DESPACHO			19 Apr 2013
16 Jan 2013	RECEPCIÓN MEMORIAL	SOLICITAN CORRECCIÓN DE DESPACHO COMISORIO (SE ASIGNA A MORA). -			16 Jan 2013
30 Aug 2012	CONSTANCIA SECRETARIAL	EN EL PUESTO			30 Aug 2012
22 Aug 2012	FIJACION ESTADO	ACTUACIÓN REGISTRADA EL 22/08/2012 A LAS 16:14:56.	24 Aug 2012	24 Aug 2012	22 Aug 2012

Advirtiéndose además que, la parte ejecutante no hizo solicitudes o peticiones desde 9 de abril de 2013, lo que permite concluir que, el motivo de no tener conocimiento del traslado del expediente al Juzgado de ejecución no fue por la falta de publicidad o de comunicación, sino por la omisión del demandante de revisar y gestionar el proceso ejecutivo, lo que conllevó a la inactividad del éste por un término superior a dos (2) años.

Es menester señalar que, el traslado de procesos por decisiones administrativas, quien lo comunica e informa es el juzgado de origen pues el juzgado receptor debe continuar con las actuaciones procesales tendientes a dar continuidad al proceso. Así en el presente proceso, el Juzgado Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla avocó conocimiento y posteriormente agregó el despacho comisorio, sin embargo, el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla al advertir la inactividad del proceso y el cumplimiento de los presupuestos del artículo 317 del CGP, optó por decretar la terminación, pues ya no procedía dar continuidad al trámite procesal.

En ese entendido, se encuentra ampliamente demostrado, que en efecto como lo sentenció el Juzgado Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, el proceso con radicado 2007-00201, presentaba una inactividad de dos (2) años por lo que era procedente decretar su terminación por desistimiento tácito, máxime si se tiene en cuenta que actuaciones provenientes del ejecutante datan de cuando el expediente se encontraba en el Juzgado Décimo Civil de Circuito de Barranquilla.

Así las cosas, el daño antijurídico alegado en el presente proceso, no se encontró acreditado, pues la parte actora se limitó a manifestar en su demanda lo que a su juicio omitió el juez Décimo Civil de Circuito de Barranquilla, el Primero de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla y el Segundo de Ejecución Civil del Circuito de Barranquilla, sin tener en cuenta que su inactividad y omisión frente al proceso, fue lo que generó la expedición del cuestionado auto.

Al respecto, conviene recalcar que el título de imputación por error jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía e independencia que tiene el juez para interpretar los hechos que se someten a su consideración, y aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico, de ahí que, corresponda a la parte actora demostrar que la interpretación del

fallador resulta contraria al ordenamiento jurídico de forma clara y evidente, lo cual no ocurrió en el presente asunto.

En ese orden ideas, considerando que la parte actora no cumplió con la carga de suficiencia que exige el título de imputación de error jurisdiccional frente a la demostración y argumentación de los yerros que se predicen de una determinada providencia y, por tanto, no demostró que el auto analizado fuera contrario a derecho, debiendo probar el daño alegado en antijurídico, lo que fuerza denegar las pretensiones de la demanda.

## **V. COSTAS**

Este Despacho se abstendrá de condenar en costas, a la parte vencida, teniendo en cuenta que no asumió en el proceso una conducta que la hiciera merecedora a esa sanción, tales como, temeridad, irracionalidad absoluta de su pretensión, dilación sistemática del trámite o en deslealtad.

En mérito de lo expuesto, **el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

## **RESUELVE**

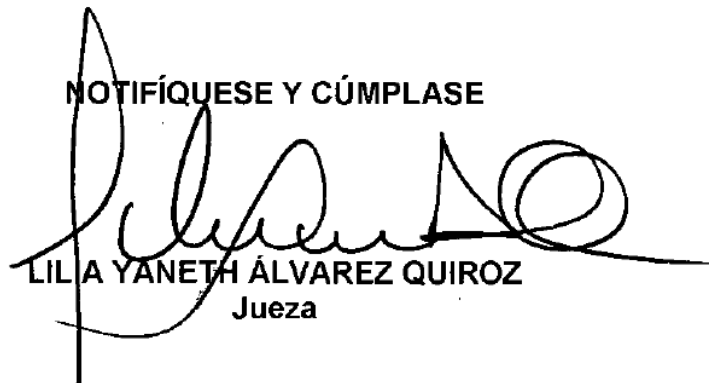
**PRIMERO: DENIÉGUESE** las suplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

**TERCERO:** Notifíquese esta sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 203 del C.P.A. y C.A.

**CUARTO:** Ejecutoriada esta sentencia ARCHÍVESE el expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



**LILA YANETH ÁLVAREZ QUIROZ**  
Jueza

KS